

# **DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO**

**Tomás Caballero Martínez**  
**Presidente**  
**Fundación Víctimas del Terrorismo**

**Congreso de los Diputados**  
**27 de junio de 2022**

**Presidenta del Congreso**

**Presidente del Senado**

**Ministro del Interior y demás ministros que nos acompañan**

**Defensor del Pueblo**

**Jefe del Estado Mayor de la Defensa**

**Mesas del Congreso y del Senado**

**Diputados y Senadores**

**Representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado**

**Resto de autoridades**

**Presidentes de Asociaciones y Fundaciones de víctimas**

**Queridas víctimas del terrorismo**

**Señoras y Señores**

Fue en 2010 cuando el Pleno de esta Cámara acordó conmemorar anualmente el Día de las Víctimas del Terrorismo en España. Pese a que la decisión se adoptó un 11 de marzo, con motivo de los actos organizados en memoria de las víctimas del peor atentado de nuestra historia -11 de marzo de 2004 en Madrid-, la fecha elegida no fue esa, sino el 27 de junio por coincidir con la del asesinato en 1960 de la pequeña Begoña Urroz, primera víctima mortal del terrorismo en España. Como señalaba la declaración institucional, esa decisión se adoptó “a fin de que su recuerdo y el de todas las víctimas del terrorismo se perpetúe en la memoria colectiva de los españoles”.

Han de ser pues mis primeras palabras de agradecimiento, estimada presidenta del Congreso de los Diputados, por mantener vivo ese compromiso y por permitir que, como Presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, me dirija a todos ustedes en nombre de las miles de personas que, durante las últimas seis décadas, hemos experimentado en nuestras vidas la cruda realidad de la

intolerancia y de la violencia terrorista. Muchas gracias a sus señorías y a las autoridades que nos acompañan por permitir que podamos trasladarles hoy nuestro testimonio.

Un testimonio que rinde homenaje a LA MEMORIA de las 1452 víctimas mortales españolas, según datos oficiales del Ministerio del Interior, ocasionadas por los diferentes tipos de terrorismo que han venido actuando en España, personas inocentes, a quienes arrebataron su vida de la forma más vil y cobarde, personas con las que siempre estaremos en deuda. También con los miles de heridos, amenazados y extorsionados

De ahí que destaquemos la importancia de la elección de aquel 27 de junio, puesto que fue esa la fecha en la que se inició un largo camino que, lamentablemente, debemos seguir recorriendo, adaptándonos a las nuevas circunstancias, y en el que las Cortes, depositarias de la soberanía nacional, han jugado un papel fundamental, no sólo en la lucha antiterrorista, sino también en el reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo.

Hablar de nuestra historia reciente, de nuestra democracia, es impensable sin hacer referencia al terrorismo. Pero también es necesario mencionar a quienes pusieron todo su empeño personal y profesional en someter a los terroristas, a veces asumiendo un altísimo coste: el de sus propias vidas.

Fueron estas Cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, las que decidieron convertir el terrorismo en una cuestión de Estado y asumieron un indiscutible liderazgo al dotar al resto de instituciones de una legislación capaz de ir acorralando todo el entramado armado e ideológico de los terroristas. Un marco normativo que, además, ha sabido adaptarse a las nuevas formas de terrorismo y a las imprescindibles necesidades de colaboración con los países de nuestro entorno.

Por ello, justo es volver a destacar hoy aquí, desde esta tribuna, el importante trabajo desarrollado por los diputados y diputadas, senadores y senadoras que, de forma incansable, han hecho frente al terrorismo. Sin ese esfuerzo, sin esa constante labor, no habría sido posible la derrota del terrorismo autóctono, ni los logros alcanzados en la lucha contra el fenómeno global que hoy representa el

terrorismo yihadista..., ni tampoco el hito que supuso la aprobación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, una norma pionera, que trasciende con creces la vertiente asistencial y prestacional al convertirse en la norma de referencia para preservar un conjunto irrenunciable de derechos de todas las víctimas y, si me lo permiten, de toda la sociedad.

Una norma que establece los pilares esenciales para la protección de las víctimas del terrorismo y que hace del respeto a la memoria de lo sucedido la piedra angular con la que garantizar la dignidad de todas las víctimas del terrorismo.

Porque, como se recoge en la ya citada Declaración Institucional de estas Cortes -11 de marzo de 2010-: *“La memoria nos salva y protege de un segundo crimen, que sería el del olvido. Mantenemos viva y fresca la memoria para honrar a los muertos, para reconfortar a los vivos y para aborrecer a los asesinos”*.

Pero, aún nos queda camino por recorrer y es necesario que, con la experiencia adquirida a lo largo de estos años, revisemos algunos aspectos de la Ley. **Por ejemplo**, la imprescindible equiparación de las indemnizaciones a las víctimas de atentados de todos los grupos terroristas sin resolver y sin sentencia, porque no es justo que la incapacidad de nuestro sistema para resolver los atentados pendientes sea, además, causa de la falta de equiparación indemnizatoria entre las víctimas con o sin sentencia judicial.

Las víctimas del terrorismo son víctimas de violaciones de derechos humanos y debe primar su protección por encima de cualquier otra consideración. Por eso pedimos que se disocie el esclarecimiento judicial del atentado de la indemnización a percibir por las víctimas. Si nuestro sistema no ha sido capaz de hacerles justicia, la consecuencia no puede ser generarles otro perjuicio adicional.

**Además**, creemos que es también imprescindible profundizar en la vertiente prestacional de la Ley, especialmente para garantizar una atención adecuada a las víctimas mayores.

Fue en esta misma sede, en su discurso de Proclamación como Rey de España, cuando Su Majestad el Rey Felipe VI, dijo que:

*“...deben estar siempre presentes, con un inmenso respeto, todos aquellos que, víctimas de la violencia terrorista, perdieron su vida o sufrieron por defender nuestra libertad. Su recuerdo permanecerá en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y la victoria del Estado de Derecho, junto a nuestro mayor afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen”.*

Esa era la meta, ese era el final del camino, pero permítanme señorías y autoridades que les cuestione sobre la inquietud, sobre el pesar, que percibo actualmente en el colectivo de víctimas del terrorismo. ¿Ustedes creen que nos acercamos a ese objetivo? ¿Creen que avanzamos hacia la que debe ser una justa normalización de la convivencia, con un claro reconocimiento de víctimas y victimarios? ¿Consideran que la memoria que las víctimas merecen es la que estamos construyendo?

Como presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, nacida en 2001, fruto de un pacto de estado, el Pacto por las Libertades, **espejo de una unidad democrática contra el terrorismo que ahora no existe**, mi respuesta a las anteriores cuestiones no es afirmativa, lamentablemente.

Si reiteradamente las víctimas han demandado la puesta en marcha de cuantos mecanismos fueran necesarios para arrojar luz a los más de trescientos asesinatos de ETA sin esclarecer, para aportar a sus familiares, en la medida de lo posible, al menos la justicia que merecen. Si hasta la saciedad se ha pedido el final de los homenajes a los terroristas, presos etarras, a la salida de las cárceles. Si continuamente se reclama la construcción de un relato ajustado a la realidad de lo acontecido, alejado de blanqueamientos y connivencias, haciendo de la educación a las nuevas generaciones la bóveda bajo la que cobijar una memoria alejada del olvido. Y si siempre hemos depositado nuestra confianza en el trabajo de los poderes del Estado como cauce para alcanzar todas esas pretensiones, que no sólo son una exigencia moral, sino que expresamente están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico.

¿Por qué muchos años después sigue habiendo TANTOS atentados de ETA sin resolver? ¿Por qué todavía se producen homenajes a terroristas a su salida de

la cárcel, algo objetivamente indigno e inmoral? ¿Por qué se sigue ocupando el espacio público con manifestaciones diversas que blanquean lo acontecido y disfrazan la única realidad, la provocada por los victimarios y sufrida por las víctimas?

Ya ven, tanto tiempo pidiendo simplemente que se cumpla la Ley.

**Y para** no mirarnos en el espejo de la autocomplacencia, creo que puede ser constructivo tratar de ver lo que perciben aquellos que de lugares más alejados se acercan a nuestra realidad. Y para ello, nada mejor que acudir a una Institución que nos representa a todos y que está dotada de la más alta legitimidad democrática: el Parlamento Europeo.

Como saben, a finales de 2021 se desplazó a España una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones para interesarse por algunas de las cuestiones planteadas y elaborar un Informe, a la postre, no sólo importante para las víctimas del terrorismo, sino para toda la sociedad española.

En sus 41 folios, que ahora hacemos nuestros, se recogen, además de conclusiones, una serie de recomendaciones de actuación en el ámbito nacional, en el de las Directivas europeas y en el internacional.

Entre las conclusiones, para el Parlamento Europeo, la cifra de 379 asesinatos impunes -apoyada por el Defensor del Pueblo español-, se “ajusta” a la magnitud del problema y evidencia una falta de justicia con respecto a las familias de las víctimas.

El Informe cita la “situación de terror creada por ETA en el País Vasco y Navarra durante los primeros años de la democracia española como la causa principal de tan importante número de delitos no resueltos”.

Junto a esta causa principal, para el Parlamento Europeo también hubo otros factores que influyeron de forma negativa. Entre ellos, el desajuste en el funcionamiento de los órganos judiciales; el período de adaptación de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la lucha contra el terrorismo en los primeros años; la omisión de investigación en algunos crímenes de ETA

político-militar tras su disolución en 1982; la falta de colaboración internacional al dar refugio a terroristas huidos que estaban acusados por los tribunales españoles o el fallecimiento de algunos terroristas acusados de asesinatos antes de ser juzgados.

**A ello se une, que “ningún antiguo miembro de ETA ha colaborado en la resolución de casos no resueltos”.**

En resumen, el Informe concluye que “se ha observado que los familiares de las casi cuatrocientas víctimas de casos de ETA sin resolver han quedado sumergidos en una «situación de impunidad consolidada» durante muchos años que se prolonga día tras día, lo que afecta de forma adicional y paralela a sus propios derechos, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe toda forma de sufrimiento indebido (artículos 2 y 3 del Convenio)”.

Este aspecto preocupa especialmente al Parlamento Europeo, ya que “existe una obligación legal, pero también colectiva, de buscar la verdad detrás de cada uno de los atentados sin resolver. No solo para intentar hacer justicia, sino también para honrar la memoria de las víctimas y que tanto ellas como sus familiares puedan descansar en paz”, recoge literalmente el informe.

En el apartado de las recomendaciones, el informe sugiere “a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad -lesa humanidad-, incluso antes de 2004, por lo que se considere que no están sujetos a prescripción ni amnistía”.

E igualmente se apoya la interpretación de nuestro Derecho penal en la teoría del autor mediato por dominio existente en el artículo 28 del Código Penal español, para así “poder enjuiciar, como autores intelectuales e instigadores de la orden, a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de la comisión de los distintos atentados no resueltos”.

Además, el texto final también sugiere al Gobierno español que, "mediante modificación legal", los condenados por terrorismo tengan que colaborar en la resolución de los atentados para acceder a beneficios penitenciarios y que se evite, desde todas las instituciones competentes, el enaltecimiento público -ongiterroris- de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo.

Si al comienzo de mi intervención recordaba el papel pionero que tuvieron estas Cortes hace años, hoy vengo a recordarles que de nada servirá ese legado si no somos capaces de seguir trabajando en esa misma línea. Y ahora tenemos una clara hoja de ruta para avanzar.

**Señorías,**

Hoy quiero apelar al espíritu de las Cortes españolas que decidieron enarbolar la bandera de la lucha contra el terrorismo y la protección de las víctimas. Escuchen al Parlamento Europeo, que aprobó su informe por abrumadora mayoría, y en lugar de tejer argumentos para defenderse de él, busquen mecanismos para implementar sus propuestas.

Hoy quiero pedirles que trabajen en la defensa de las víctimas y en el pleno reconocimiento de sus derechos, en combatir la impunidad y en hacer inviable cualquier forma de blanqueamiento de los autores materiales o intelectuales de los atentados y que lo hagan no sólo mirando al pasado, sino al futuro, porque esa también es una forma de proteger nuestra democracia.

Hoy quiero suplicarles, una vez más, que recuerden que la memoria y el honor de las víctimas no es negociable ni mucho menos renunciable.

Hoy quiero recordarles que la dignificación de las víctimas no se logra solo marcando un día en el calendario, porque el dolor, la pérdida, la impunidad, permanecen los 365 días del año.

Señorías, no olviden, no ignoren, no busquen excusas. Por favor, escuchen a quienes se han acercado a nosotros para ayudar. Muchas gracias